

C.A. de Santiago

Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

Se reproduce la sentencia en alzada, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, sustituyéndose en el motivo vigésimo primero el guarismo “\$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), por “70.000.000.- (setenta millones de pesos); y, se elimina su considerando Vigésimo Segundo.

**Y SE TIENE EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que, conforme se desprende del fallo de la A Quo y particularmente de los escritos de apelación, los hechos principales objeto de la pretensión del actor, en lo medular, no han sido discutidos por el Fisco demandado, lo que permitió que la actividad procesal de aquel estuviera dirigida a demostrar la existencia del daño moral cuyo resarcimiento persigue y la desplegada por el Fisco de Chile, estuvo más bien encaminada a establecer la inexistencia de la obligación por haberse extinguido como consecuencia del pago (reparación satisfactoria) y prescripción, además de controvertir el quantum indemnizatorio.

**SEGUNDO:** Que, las alegaciones del demandado -reparación integral y prescripción- fueron desestimadas en extenso por la Jueza A Quo, conforme a los argumentos consignados en su sentencia y que esta Corte comparte en su integridad; no obstante ello, estos tópicos resultan nuevamente cuestionados en la apelación de dicha parte, pero habrá de remitirse a los raciocinios consignados en la decisión rebatida, de manera que la revisión que se ha planteado vía apelación de los mismos, no es posible que prosperen.

**TERCERO:** Que, sin embargo, para los efectos de abordar aquí el acápite de las apelaciones que resulta coincidente y que se refieren al monto indemnizatorio, no está de más señalar que los hechos dañosos, los cuales deriva la acción que se ha intentado en autos, corresponden a los mismos que dieron lugar a la decisión penal condenatoria de varios agentes del Estado, pronunciada el 28 de enero de 2005, en la causa Rol 39122, por Ministro de Fuero de esta Corte don Hugo Dolmestch Urrutia, confirmada por esta Corte de Apelaciones en la causa Rol 11914-2005

finalmente en sentencia de casación de fecha 28 de agosto de 2007, en el Rol 1621-16, de la Excma. Corte Suprema, concluyéndose que en virtud de los hechos constatados, don Juan Waldemar Henríquez Araya, padre del actor, fue acreditado como víctima de violaciones a los derechos humanos por el Estado de Chile, en su calidad de ejecutado político.

**CUARTO:** Que, esta vez se trata de la arista reparatoria civil de estos hechos, en lo que dice relación con el padre del actor señor Henríquez Araya y dada la extensión del mal causado por ellos, sin que exista duda, como además lo razona la jueza a quo, que tales acontecimientos constituyen un delito de lesa humanidad, y que por lo mismo, recae en el Estado su resarcimiento íntegro.

**QUINTO:** Que, relacionado con esto último, en lo tocante a la indemnización por el daño producido por el ilícito penal, en su examen debe atenderse al estatuto de derechos comprometidos en la especie, que no es otro que el Internacional de Derechos Humanos, integrado por normas positivas del Derecho Internacional, conformado por Convenios, Tratados y otros instrumentos ratificados por Chile y que obligan al Estado a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, según lo disponen los artículos 5° inciso 2° y 6° de la Constitución Política de la República.

**SEXTO:** Que, en consecuencia, dado el contexto en que se verificó el delito, esto es, en un momento de extrema anormalidad institucional, en que los hechores -agentes del Estado- en representación del gobierno de la época, como quedó asentado en el proceso, ejecutaron ilícitos tal gravedad, según dan cuenta las piezas del expediente penal que consigna la jueza a quo, imponen al Estado de Chile la obligación de resarcir el daño causado, tal como lo ordena el Derecho Internacional, traducido en Convenios y Tratados que, por clara disposición constitucional, le son vinculantes y ello no puede ser de otro modo, si se considera que la indemnización del daño producido por el delito y la acción para hacerla efectiva, es de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, pues compromete el interés público y aspectos de justicia material, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos

por el país y la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional.

**SÉPTIMO:** Que, adicionado a lo anterior, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, consagran el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, imponiendo tal resarcimiento al respectivo Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos.

Luego, y como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1, los Estados tienen el deber de pagar una justa retribución a los lesionados en caso de violaciones a los derechos humanos, la que debe comprender una indemnización compensatoria del detrimento material e inmaterial que han experimentado y que debe considerar los daños psicológicos, morales, el proyecto de vida individual y colectivo y el perjuicio al patrimonio de la familia.

**OCTAVO:** Que, en ese contexto, ha quedado demostrado que el actor es hijo de don Juan Waldemar Henríquez Araya, quien fue ejecutado de la forma que se señala en la sentencia que se revisa. Luego, la pretensión indemnizatoria del demandante, claramente deriva de la relación de parentesco con la víctima del delito, hechos que además de no haber sido controvertidos, se encuentran comprobados con la documental agregada al proceso, demostrándose en particular del mérito de los antecedentes aportados por los tres testigos que comparecieron a juicio, el padecimiento del actor por la ejecución de su padre y las secuelas que tales hechos han provocado en su vida y que ha debido sobrellevar por un largo período, considerando que a la fecha de la ocurrencia del ilícito tenía sólo cuatro años de edad.

**NOVENO:** Que, en concordancia con todo lo señalado, la cuantificación del daño se hará prudencialmente por esta Corte, habiendo en consideración de la naturaleza, entidad y extensión del mismo, teniendo para ello especialmente presente, las circunstancias en que se produjeron los hechos, que el demandante fue privado de la presencia de su padre, la edad que estos tenían a la fecha de ocurrencia de aquéllos, el dolor de vivir bajo un duelo permanente y una ausencia irreparable, lo que afectó a s

núcleo familiar y toda su vida futura, tal como en extenso se razona en el fallo base.

**DÉCIMO:** Que, además, para establecer el monto de la indemnización que se regulará, se tendrá en consideración la naturaleza inmaterial del perjuicio, conforme a los criterios y cuantías que en general se han ido otorgando en casos similares fallados por los Tribunales Superiores, como por la Excm. Corte Suprema y este mismo tribunal, y particularmente que, dada la naturaleza del daño que se reclama, no es posible pensar que alguna suma que se fije lo haga desaparecer, satisfaga íntegramente al ofendido o restablezca la situación anterior al acaecimiento del ilícito.

En consecuencia, este tribunal elevará el monto de lo otorgado en primera instancia, por considerarlo más adecuado a los hechos asentados en el proceso y el carácter de la conducta que ha generado esta obligación de resarcir.

**UNDÉCIMO:** Que, en lo relativo a los reajustes, los que fueron apelados por la demandada al haber sido concedidos desde la fecha de la sentencia de la A Quo, esta Corte procederá a revocar lo resuelto en esta parte, estableciendo que el monto de la indemnización que deberá satisfacer el demandado, se reajustará conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia quede firme o ejecutoriada pues es esa la ocasión en que aquellos han quedado determinados y hasta la época de su pago efectivo. Asimismo, devengará intereses a contar de esa misma oportunidad.

**Por las consideraciones** expuestas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Internacional sobre Derechos Humanos y el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil:

I.- **SE REVOCA** la sentencia en alzada en la parte que establece que las sumas ordenadas pagar devengarán los reajustes que se consignan en considerando 22° del fallo que se revisa y, en su lugar, se resuelve que la suma ordenada pagar devengará los reajustes e intereses que se establecen en el motivo undécimo del presente fallo.

II.- **SE CONFIRMA** la sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, co

**declaración** que se eleva la indemnización por daño moral a la suma de \$70.000.000.- (setenta millones de pesos) para el demandante don Juan Bernardo Henríquez Ormeño, en su calidad de hijo de la víctima don Juan Waldemar Henríquez Araya.

**Se previene** que la Fiscal Judicial Sra. Troncoso, en lo que hace al resolutivo II del presente fallo, estuvo por confirmar la sentencia en alzada, con declaración de que se rebaja la indemnización concedida por concepto de daño moral a la suma de \$30.000.000 (treinta millones de pesos), teniendo en consideración que toda indemnización de perjuicios tiene una finalidad reparatoria, cuya medida está dada por el daño sufrido, sin que pueda constituir una fuente de lucro, debiendo considerarse entonces, para calibrar adecuadamente su justa medida y proporcionalidad, todos los beneficios y medidas reparatorias y satisfactivas a las que ya ha accedido el ofendido en forma previa –y aquellos de los que continuará gozando- a través de los distintos programas que ha implementado el Estado de Chile. Lo anterior lleva a estimar a quien previene, que la suma fijada por la juez del grado debió ser morigerada sustancialmente, teniendo en cuenta los aspectos ya señalados.

Redacción del abogado integrante Sr. Asenjo y de la prevención, su autora.

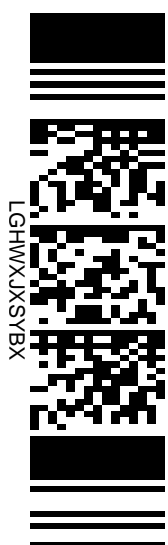
Regístrese y comuníquese.

N°Civil-1689-2023.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada, además, por la señora Fiscal Judicial Macarena Troncoso López y el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

En Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.





Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G., Fiscal Judicial Macarena Troncoso L. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

